



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL.

Medellín, veintiocho (28) de junio de dos mil veintidós (2022).

DEMANDANTE: MARIA RUBY LADINO RÍOS.
DEMANDADO: PORVENIR S.A. y COLPENSIONES.
TIPO DE PROCESO: ORDINARIO.
DECISIÓN: **ADICIONA, REVOCA parcialmente y CONFIRMA.**

En la fecha, **EI TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados Nancy Gutiérrez Salazar, Carlos Alberto Lebrún Morales y María Eugenia Gómez Velásquez, se reunió para revisar el recurso de apelación interpuesto por ambas partes y el Grado Jurisdiccional de Consulta que se surte en favor de Colpensiones, frente a la Sentencia proferida en el Proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora **MARIA RUBY LADINO RÍOS**, en contra de **PORVENIR S.A.** y de **COLPENSIONES**.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 74 y 75 del Código General del Proceso, en los términos de la sustitución de poder obrante en el archivo 06 del expediente digital, Segunda Instancia, se reconoce personería para actuar en representación de COLPENSIONES a la abogada LEIDY VERÓNICA GONZÁLEZ LÓPEZ, con Tarjeta Profesional 196.444 del C.S. de la J.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN ESTA INSTANCIA:

DEMANDANTE.

Expone que se debe confirmar la Sentencia de instancia, ya que se demostró que la demandada incumplió con la debida diligencia, al no brindarle información adecuada y suficiente, debiendo reintegrar a Colpensiones todos los dineros recibidos, incluidos los gastos de administración.

PORVENIR S.A.

Solicita que se revoque la sentencia de instancia al no existir razones fácticas o jurídicas para declarar la Ineficacia del traslado de régimen, ya que la demandante realizó su

traslado en forma libre y voluntaria, al haber recibido la debida asesoría de parte de la AFP la cual cumplió su deber de diligencia y cuidado en los términos de la normatividad vigente para tal momento, sin que a esta se le puedan exigir requisitos adicionales no previstos en la ley. Que además la afiliada es economista, contando con la capacidad suficiente para comprender las implicaciones del acto que estaba llevando a cabo, sin que la diferencia en la mesada pensional -lo cual no puede ser determinado al momento de la asesoría-, sea una razón suficiente para declarar tal Ineficacia. Que la actora no cumplió con su deber de diligencia y cuidado en sus propios actos, sin que se pueda beneficiar de su propia culpa o negligencia. Sobre los valores recibidos con motivo de la afiliación, en especial las cuotas de administración, expone que estos tienen por mandato legal una destinación específica, han cumplido su cometido y no se encuentran en el patrimonio de la AFP al haberse invertido en la generación de rendimientos y el cubrimiento de los riesgos de invalidez y muerte, lo cual no se puede retrotraer, sin que se pueda hablar de un enriquecimiento sin causa, debiéndose tener en cuenta la estabilidad y sostenibilidad financiera del Sistema, así como dar aplicación a las restituciones mutuas. Y frente a las Costas Procesales dice que siempre actuó de buena fe, por lo que esta condena no es procedente.

COLPENSIONES.

Dice que los actos jurídicos se presumen válidos hasta que se demuestre su nulidad por la existencia de un vicio en el consentimiento. Que el formulario de afiliación suscrito por la actora surtió plenos efectos jurídicos, encontrándose válidamente afiliada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS-, sin que sea posible su regreso al Régimen de Prima Media con Prestación Definida -RPMPD- al faltarle menos de 10 años para pensionarse. Pero que de declararse la nulidad de la afiliación, PORVENIR S.A. debe reintegrar todas las sumas de dinero que recibió de la demandante. Y finaliza diciendo que la actora contaba con 4 años para solicitar la nulidad, la cual ya prescribió.

La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por la Ponente, el cual se traduce en la siguiente decisión:

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

ANTECEDENTES:

PRETENSIONES:

- Declarar la nulidad o Ineficacia del traslado de la demandante del Régimen de Prima Media con Prestación Definida -RPMPD- al Régimen de Ahorro Individual

con Solidaridad -RAIS-; y que le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de vejez.

- Condenar a PORVENIR S.A. a trasladar a COLPENSIONES todos los aportes con los rendimientos de la cuenta de ahorro individual de la demandante; y a esta última demandada, a reconocerle la pensión de vejez, los intereses moratorios del Art. 141 de la Ley 100 de 1993 y/o la indexación.
- Subsidiariamente, solicita que se condene a PORVENIR S.A. a reconocer los perjuicios materiales ocasionados, asumiendo el mayor valor o reajuste de la pensión de vejez que se le hubiere reconocido en el régimen de Prima Media con Prestación Definida.

HECHOS:

- Que cotizó al ISS desde el 16 de abril de 1979, trasladándose al RAIS el 11 de febrero de 1995, cuando la Contraloría Municipal de Quinchía –empleador-, la afilió a PORVENIR S.A.
- Que la suscripción del formulario se dio sin recibir una asesoría imparcial, por lo que no se puede decir que la AFP cumplió con su deber de información, ya que no le explicaron las ventajas y desventajas de ambos regímenes.
- Y que cumple con los requisitos exigidos por el Art. 33 de la Ley 100 de 1993 para la procedencia de la pensión de vejez; evidenciándose el perjuicio causado con el traslado de régimen pensional, ya que en el RPMPD hubiera podido pensionarse con una mesada aproximada de \$1.711.800 y en el RAIS ni siquiera alcanzaría una pensión.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Declaró la Ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS. Ordenó a PORVENIR S.A. trasladarla al RPMPD y a devolver todos los valores recibidos con motivo de la afiliación de aquella, como cotizaciones completas, rendimientos, bonos pensionales, ahorros voluntarios y con excepción únicamente de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración. Ordenó a Colpensiones recibir todos los dineros que le sean trasladados; condenándola a reconocer la pensión de vejez a la demandante en los términos del art. 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 9 de la Ley 797 de 2003, liquidada en los términos de los arts. 21 y 34 de la Ley 100 de 1993 y sobre 13 mesadas anuales, debidamente indexadas, una vez se acredite el retiro efectivo del sistema; autorizándola a realizar los descuentos en salud. Absolvió a COLPENSIONES de los intereses moratorios. Declaró probada la Excepción de inexistencia de la obligación de devolver los dineros por concepto de cuotas de administración, y no probada la de prescripción; y Condenó en Costas Procesales a PORVENIR S.A., exonerando de estas a Colpensiones.

Frente a la pensión de vejez, expuso que la demandante cumple con los requisitos mínimos exigidos, esto es, con la edad al contar con 60 años y con las semanas cotizadas ya que tiene 1.322, pero como cotizó hasta el año 2021, condicionó el reconocimiento y pago de la pensión al retiro del Sistema.

Sobre los Intereses moratorios expuso que no hay lugar a estos, por cuanto no se ha iniciado el disfrute de la pensión, sin haber mesadas en mora; ordenando la indexación de las sumas que se lleguen a reconocer.

Y respecto a la Indemnización de perjuicios, dijo que como ésta se propuso como subsidiaria, accediéndose a las condenas principales, quedaba relevado de analizarla.

RECURSO DE APELACIÓN.

DEMANDANTE.

Solicita que se revoque o modifique la sentencia de instancia en cuanto no se ordenó la devolución de cuotas de administración, teniendo en cuenta que al reconocerse la Ineficacia se deben devolver todos los valores, incluyendo los antes señalados.

PORVENIR S.A.

Pide que se revoque la sentencia de instancia, por cuanto la demandante se afilió en el año 1995, cuando el contexto normativo vigente para tal momento no tenía el nivel interpretativo que se da en la actualidad, y es que la información se podía brindar en forma verbal para tomarse la decisión de pertenecer o no al RAIS. Que la demandante contaba con una formación académica como economista que le permitía entender la información que se le estaba brindando, la cual se le brindó en forma grupal e individual, entregándole una cartilla con información sobre el RAIS y brindándole asesoría constante, incluso por otras Administradoras de pensiones.

COLPENSIONES.

Frente a la no devolución de las cuotas de administración, expone que la Ineficacia tiene como consecuencia que las cosas vuelvan al estado en el que se encontraban antes, esto es, como si el acto de traslado no hubiese existido, debiéndose trasladar tal concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

- **Objeto:** Determinar si en el caso a estudio, es o no procedente la declaración de Ineficacia del traslado efectuado por la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y las consecuencias que de ello se derivan; y si se acreditan o no los requisitos necesarios para acceder a la pensión de vejez. Veamos:

En el caso concreto, la demandante se afilió al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, inicialmente al ISS hoy COLPENSIONES desde el **16 de abril de 1979**, según se infiere de la Historia Laboral de fl. 27 del archivo digital 01; trasladándose al RAIS a través del Fondo privado de pensiones PORVENIR S.A. el **12 de abril de 1995**, según consta en la solicitud de vinculación de folio 37 ibídem, y en el reporte SIAFP de folio 73, archivo 05 digital.

Respecto al tema de la Ineficacia de traslado de régimen pensional, conforme a la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Cas. Laboral, vertida en Sentencias Radicados 33.083 del 22 de noviembre de 2011, y 46.292 del 03 de septiembre de 2014, M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón, y más recientemente en las Sentencias Laborales 1452 del 3 de abril de 2019, Rad 68852 M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo y 1421 del 10 de abril del mismo año, Rad. N.º 56174 M.P. Gerardo Botero Zuluaga, para los casos de afiliados, las Administradoras de Fondos de pensiones tienen el deber de gestión de los intereses de quienes se vinculan a ellas, que surge desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de la afiliación, por lo que el engaño en el que incurre la entidad, tiene su fuente en la falta al deber de información, tanto en lo que se afirma, como en lo que se omite informar sobre lo que resulte relevante para la toma de la decisión que se persigue, independientemente que para el momento del traslado, una norma lo exija o no.

Ahora, respecto a la firma del formulario proforma, en la Sentencia Laboral 1688 del 8 de mayo de 2019, Rad. N.º 68838, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, dicha Corporación sostuvo que:

“... no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada”.

“... la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «*la afiliación se hace libre y voluntaria*», «*se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones*» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no *informado*...”

En similar sentido, se pronunció dicha Corporación en la SL 4360 del 9 de octubre de 2019, Rad 68852, M.P Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

En ese orden de ideas, al presentarse el traslado de la carga de la prueba del afiliado a las Administradoras de Fondos de pensiones, por ser estas las que cuentan con los medios técnicos y los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, era PORVENIR S.A. la que tenía la obligación de probar en el proceso que brindó una asesoría personalizada y completa a la demandante al momento de su traslado de régimen, analizando las circunstancias particulares de su caso, debiéndole informar por ejemplo,

que existen diferentes modalidades pensionales, que el valor de la pensión de vejez en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad depende del capital consignado en la cuenta de ahorro individual; que si no completa el capital suficiente para obtener por lo menos una pensión mínima -equivalente al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de la Ley 100 de 1993, actualizado con el IPC-, debe seguir cotizando, si es o no beneficiario del régimen de transición pensional y las ventajas que se derivan del mismo, así como efectuarle las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia el futuro de ambas opciones, con el cálculo aproximado del monto pensional que le correspondería, y en fin, mostrarle al afiliado **con detalle**, las ventajas y desventajas de tomar la decisión de traslado, para que la misma sea realmente consensuada, libre y voluntaria y otras tantas observaciones al respecto.

Y es que debe reiterarse que la labor del funcionario del Fondo privado de pensiones en el momento previo a hacer efectivo el traslado de régimen, debe trascender al “DEBER DEL BUEN CONSEJO”, como lo ha señalado la jurisprudencia laboral; en la medida que es responsabilidad de dichas Administradoras y de sus promotores, velar por la información realmente suministrada a sus usuarios -art. 10 Decreto 720 de 1994 por el cual se reglamentaron los arts.105 y parcialmente el 287 de la Ley 100 de 1993-; lo cual fue reiterado en el artículo 2.6.10.2.3 del Decreto 2255 de 2010, que le impone a las Administradoras de Fondos de pensiones, en desarrollo de tal deber, la obligación de proporcionar a los consumidores financieros información completa, así como los beneficios, inconvenientes y efectos de la toma de la decisión.

Ahora, si bien PORVENIR S.A. afirmó al contestar la demanda que a la demandante se le brindó la asesoría requerida para el caso –archivo digital 05-, de acuerdo con la jurisprudencia ya descrita tenía la carga de acreditarlo, y sin embargo, la prueba que trajo al proceso no fue lo suficientemente persuasiva de ello, pues nótese que el **formulario de afiliación y/o traslado ya referenciado corresponde a uno preestablecido** que no da cuenta de la información realmente suministrada a aquella en ese momento, sin haberse aportado prueba de la información suministrada en la cartilla que supuestamente se le entregó al momento del traslado; y sin que con los comunicados de prensa de fls. 75 a 77 ibídem -generales e ilegibles por demás-, o el hecho de haber realizado la demandante actos de relacionamiento -como es recibir extractos o asesorías de otros Fondos-, se pueda dar por ratificado el acto inicial de traslado de régimen pensional, al tenor de lo dispuesto en el artículo 898 del Código de Comercio, pues como lo viene sosteniendo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la oportunidad de la información se juzga es al momento del acto jurídico del traslado, y no con posterioridad al mismo – Sentencia Laboral 1688 de 2019 antes citada, en la que se reitera lo expuesto en la también citada Sentencia 19447 de 2017-.

Así las cosas, en el caso a estudio considera la Sala que se incumplió una de las solemnidades legalmente previstas para la eficacia del acto de traslado de régimen pensional, como lo es el deber de información en un asunto tan importante para un afiliado por su incidencia en el derecho pensional, trayendo como consecuencia la declaración de Ineficacia del traslado de régimen, y con ello, que las cosas vuelvan al estado anterior en el que se encontraban antes de la misma, como que la demandante nunca se trasladó al RAIS; no teniendo en criterio de la Sala ninguna incidencia el hecho de que a ella le falten menos de 10 años para cumplir la edad mínima para obtener la pensión de vejez, pues como quedó explicado precedentemente, al declararse la ineficacia de la afiliación, las cosas vuelven al estado en el que se encontraban anteriormente.

Consecuente con lo anterior, se **CONFIRMARÁ** lo decidido por el juez de instancia al respecto.

TRASLADO DE SALDOS.

Considera la Sala que al declararse la Ineficacia del traslado de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, todos aquellos actos jurídicos que se celebraron con posterioridad a la suscripción de dicha afiliación pierden su fuerza vinculante; por lo que es legítimo que PORVENIR S.A. traslade a Colpensiones el 100% de los aportes obligatorios efectuados por la demandante, esto es, cotizaciones completas y rendimientos, tal como lo concluyó el juez de instancia, pero incluyendo además, los gastos de administración, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivencia, los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, la Prima de reaseguros de Fogafín, y en caso de haberse generado, los aportes al Fondo de solidaridad pensional, que se hubieren causado durante el tiempo en el que el actor estuvo afiliado a dicha Administradora. Lo anterior, según lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral desde la Sentencia Radicado 31.989 del 9 de septiembre de 2008, M.P. Eduardo López Villegas, y más recientemente en las Sentencias Laborales 4.989 y 4.964 del 14 de noviembre de 2018, Radicados 47.125 y 54.814, respectivamente, M.P. Gerardo Botero Zuluaga, y en la 1.688 del 8 de mayo de 2019, Radicado 68.838 M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Pero no así, los bonos pensionales ni los ahorros voluntarios de la afiliada. Los primeros, por cuanto estos en los términos del artículo 115 de la Ley 100 de 1993 solo se genera para los afiliados que con anterioridad a su ingreso al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad cumplan con alguno de los requisitos previstos en la referida disposición normativa, y además tal bono es emitido por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo cual en caso de haberse generado, lo pertinente es que el Fondo privado de pensiones devuelva a dicho Ministerio el valor del mismo, no a Colpensiones; y los segundos, toda vez que según el artículo 62 de la Ley 100 de 1993, estos son una

posibilidad que se le brinda a los afiliados de cotizar valores superiores a los que por Ley están obligados a realizar, pudiendo disponer en cualquier momento de tales dineros, los cuales, según lo dispuesto en los artículos 70 y 77 ibidem, ni siquiera hacen parte del capital para financiar las pensiones de invalidez o sobrevivientes, salvo que así lo disponga el afiliado, es decir que los mismos, como su nombre lo indica, son facultativos del afiliado, diferente a lo que ocurre con la cotización obligatoria que sí está destinada a la conformación de los recursos necesarios para cubrir las prestaciones a las que haya lugar. Tal obligación deberá cumplirse dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia –art. 16 Decreto 692 de 1994-. **CONFIRMA, REVOCA y ADICIONA.**

Y es que no comparte La Sala la postura adoptada por el juez de instancia y la inconformidad planteada por la apoderada de la AFP demandada, en torno a la orden de devolución de las cuotas de administración, ya que si bien del artículo 20 de la Ley 100 de 1993 se desprende que del valor mensual de la cotización, un porcentaje se destina al pago de tal concepto, lo cierto es que ante la declaratoria de Ineficacia del traslado de régimen, al volver las cosas al estado en el que se encontraban antes de la misma, estas no se pueden generar ni en favor de las Administradoras de Fondos privados de pensiones demandadas, ni en favor de terceros, sin que además, tal reintegro dependa de la gestión realizada, la pérdida de la especie, el detrimento del bien, o de la equivalencia de los rendimientos.

Adicional a ello, La Sala se permite resaltar que el precedente judicial proveniente de los máximos órganos de cierre tanto de la justicia constitucional como de la justicia ordinaria vincula a los demás jueces, es decir, es de obligatorio cumplimiento, al tenor de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la SU 354 del 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escruce Mayolo, en la que manifestó:

“Según lo consagrado en los artículos 234, 237 y 241 de la Constitución Política, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, como tribunales de cierre de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, al igual que la Corte Constitucional, como órgano encargado de salvaguardar la supremacía e integridad de la Carta, tienen el deber de unificar la jurisprudencia al interior de sus jurisdicciones, de tal manera que los pronunciamientos por ellas emitidos se conviertan en precedente judicial de obligatorio cumplimiento...”

(Otra Providencia en similar sentido, es la SU 611 del 4 de octubre de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).

Se **CONFIRMARÁ** así mismo la orden dada a Colpensiones de recibir las sumas provenientes de PORVENIR S.A. para financiar la pensión de vejez de la actora.

PENSIÓN DE VEJEZ:

El art.33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 9 de la Ley 797 de 2003, prevé:

“Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o. de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015...”.

En el presente asunto según se desprende de la copia de la Cédula de Ciudadanía de la demandante, esta nació el 15 de octubre de 1960, por lo que cumplió la edad para pensionarse -fl. 23 del archivo digital 01, primera instancia-, esto es, 57 años, el mismo día y mes del año **2017**; y de la Historia laboral se desprende que reporta un total de **1.323** semanas cotizadas a marzo de 2021 -fls. 34 a 68, archivo 05 ibid.-; cumpliendo así los requisitos mínimos exigidos por la referida norma para causar el derecho pensional. **CONFIRMA.**

Pensión de vejez que deberá ser reconocida a la actora a partir del día siguiente a la última cotización realizada por la misma al Sistema pensional; debiéndose liquidar tal prestación conforme lo disponen los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993. **CONFIRMA.**

INDEXACIÓN DE LAS CONDENAS.

Como quiera que la devaluación de la moneda constituye un hecho notorio en el mercado colombiano, ella es procedente en caso de que haya un retroactivo pensional a deber, ya que este aún no ha ingresado al patrimonio de la demandante y cuando lo haga se habrán visto envilecido por la pérdida del poder adquisitivo en el mercado.

Así las cosas, la demandada deberá indexar lo debido, desde la causación de cada una de las mesadas pensionales hasta la fecha de su pago efectivo. **CONFIRMA.**

Costas Procesales de Segunda Instancia, a cargo de Porvenir S.A. por haber resultado vencida en el recurso. Agencias en derecho: 1 SMLMV.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

DECIDE:


PRIMERO: ADICIONAR y REVOCAR parcialmente el numeral **SEGUNDO** de la Sentencia proferida por el **Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín** el 19 de mayo de 2021, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por la señora **MARIA RUBY LADINO RÍOS**, en contra de **PORVENIR S.A.** y de **COLPENSIONES**, en cuanto que la primera demandada deberá efectuar a la segunda, la devolución del 100% de los aportes obligatorios efectuados por la demandante ordenados en la sentencia de primera instancia, pero incluyendo además, los gastos de administración, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivencia, los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, la Prima de reaseguros de Fogafín, y en caso de haberse generado, los aportes al Fondo de solidaridad pensional, causados durante el tiempo en que la actora estuvo afiliada a dicha Administradora, pero no así los bonos pensionales, ni los ahorros voluntarios. Obligación que deberá cumplirse dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, según las consideraciones de esta sentencia.


SEGUNDO: CONFIRMAR en los demás.

TERCERO: Costas Procesales de Segunda Instancia, a cargo de Porvenir S.A.. Agencias en derecho: 1 SMLMV.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO** y se firma en constancia.

Los magistrados,


NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ